

La CES por el crecimiento sostenible y el progreso social

Resolución adoptada en la reunión del Comité Ejecutivo de 27-28 de octubre 2022

Resumen de la Resolución

El Semestre Europeo tiene que coordinar un esfuerzo europeo para: proteger a los trabajadores y a sus familias contra la subida del coste de la vida; promover la negociación colectiva; y garantizar los recursos adecuados para los sistemas de protección social. El MRR debe aportar recursos para las inversiones. Una refinanciación del SURE debería garantizar recursos para transiciones laborales más justas y proteger a los hogares contra la pobreza, en esta época difícil de precios de la energía disparados y de recesión económica amenazante. También seguirá apoyando los planes de reducción de jornada y medidas similares, para ayudar a los Estados miembros a proteger los puestos de trabajo y, por tanto, a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia contra el riesgo de desempleo y la pérdida de ingresos. Las políticas macroeconómicas y fiscales deben ir de la mano para permitir las tan necesarias inversiones para la transformación socioecológica de nuestras economías, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad fiscal y contrarrestando los ataques especulativos de los agentes financieros contra la deuda soberana. La dimensión social del Semestre debe reforzarse mediante la aplicación de los tres objetivos principales de la UE en materia de empleo, competencias y reducción de la pobreza.

Una de las prioridades del Semestre Europeo debería ser la coordinación de las políticas europeas y nacionales para proteger a los afectados por las consecuencias económicas de la guerra y de la pandemia de COVID-19. Los trabajadores europeos están sufriendo porque los salarios no están a la altura de la inflación y porque el fuerte y rápido aumento de los precios de la energía y los alimentos hace que muchos hogares caigan por debajo del umbral de la pobreza. Por lo tanto, el Semestre Europeo debe comprometer a la UE, y a sus Estados miembros, a establecer un conjunto de medidas que incluyan:

- Promover la negociación colectiva para aumentar los salarios y adaptar los modos de producción al nuevo contexto económico. Los salarios mínimos y los salarios bajos también deberían reflejar el aumento del coste de la vida. El Semestre debe garantizar que los interlocutores sociales participen adecuadamente en la fijación del salario mínimo legal, allí donde exista.
- Dar margen de maniobra al gasto público para medidas de protección social que protejan a los trabajadores y a sus familias contra el riesgo de pobreza. Imponer un control de precios de la energía, los productos alimentarios básicos y los servicios fundamentales para evitar que las ineficiencias del mercado en la fijación de precios erosionen el bienestar de las personas.
- Apoyar a las empresas con la condición de mantener el empleo, crear puestos de trabajo y aumentar las inversiones netas¹ especialmente en las PYME. Programas de emergencia, como el Marco Temporal de Crisis, REPowerEU y el Plan de Acción de

¹ La no distribución de dividendos, la no recompra de acciones y la no presencia en paraísos fiscales deberían ser también parte de las condiciones.

Preparación para el Invierno deberían ser socialmente sostenibles, lo que todavía no es el caso.

El marco de la Autonomía Estratégica Abierta (AEA) exige una mayor inversión en seguridad. En opinión de la CES, el concepto de seguridad debe definirse de forma que abarque todas las dimensiones de la seguridad:

- El mantenimiento de la paz y la protección frente a factores externos, no sólo como una cuestión relacionada con la estrategia de defensa, sino también con el refuerzo de la autonomía económica, energética y alimentaria (Autonomía Estratégica).
- Reforzar los sistemas de protección social y de asistencia sanitaria y mejorar las disposiciones estructurales de asistencia a largo plazo accesibles a todos, que sean adecuadas a las necesidades de las personas, especialmente en caso de pandemia u otras crisis sanitarias, así como en respuesta a la evolución de las tendencias demográficas.
- La cohesión social y territorial con vistas a reforzar las instituciones democráticas a nivel nacional y europeo, apoyar el crecimiento inclusivo y sostenible, e impulsar la convergencia al alza de las condiciones de vida y de trabajo.

Las perspectivas económicas son sombrías y se ejercerá más presión sobre los presupuestos públicos, debido a factores que no están bajo el control de los Estados miembros. El Semestre Europeo debe crear un margen fiscal para financiar medidas urgentes para los trabajadores, las empresas y los hogares. Los objetivos principales adoptados en Oporto para el empleo, la lucha contra la pobreza y el acceso al mercado laboral, deberían utilizarse para medir los progresos.

La CES prevé que los proyectos de planes presupuestarios, que se presentarán en octubre, demostrarán la presión a la que están sometidos los gobiernos. El Semestre Europeo debe garantizar la disponibilidad de recursos para financiar de forma equitativa una transición más justa, de modo que todos los trabajadores tengan las mismas oportunidades de estar protegidos frente a las dificultades sociales y económicas a las que se enfrentan. Los instrumentos europeos, como el SURE, han demostrado su eficacia a la hora de absorber los choques económicos, aliviando el presupuesto de los Estados miembros.

También es probable que aumente la deuda agregada de los Estados miembros de la UE. Es importante que los tipos de interés se mantengan razonablemente bajos y que el BCE siga aplicando políticas monetarias que protejan la deuda soberana contra cualquier forma de especulación. En tiempos de extrema dificultad para los y las europeas sería inaceptable que la política monetaria, dentro y fuera de la zona euro, fuera un vehículo para las antiguas medidas de austeridad o no impidiera la exposición de los Estados miembros a la especulación financiera.

En el próximo ciclo del Semestre es importante garantizar un diálogo más estrecho entre la Comisión de la UE y los Gobiernos, con una participación más estructurada de los interlocutores sociales, con el fin de identificar un camino país por país para la sostenibilidad a medio plazo de las finanzas públicas que respete plenamente las metas/objetivos de inversión, empleo y protección social. El Semestre Europeo debe buscar la estabilidad financiera teniendo en cuenta la situación global de la UE (y en particular de la zona euro).

El Semestre Europeo tiene que garantizar que las inversiones públicas sigan desplegándose en el ámbito del MRR, aplicando los planes nacionales de recuperación y resiliencia. El nivel de inversiones públicas brutas debe mantenerse al menos por encima del 3% del PIB, persiguiendo una convergencia en la capacidad de inversión de

los Estados miembros (las inversiones financiadas con recursos de la UE no deben sustituir a las ya financiadas por los presupuestos nacionales). Mientras que los recursos del MRR se desembolsan en función de la consecución de hitos y objetivos, el impacto de los nuevos programas de la UE (REPowerEU, Marco Temporal de Crisis, Plan de Acción de Preparación para el Invierno), está acelerando las transiciones y transfiriendo una enorme cantidad de recursos a las empresas, sin tener un control total sobre las consecuencias en el empleo y la distribución de la renta.

Es urgente apoyar a los Estados miembros en el establecimiento de marcos sociales que garanticen el pleno empleo y la protección de los trabajadores, y sus familias, contra la pobreza en una situación de rápidas transiciones laborales. Será necesario desplegar políticas activas del mercado de trabajo específicas, con la plena participación de los interlocutores sociales, para apoyar las transiciones sectoriales como resultado de los cambios estructurales debidos a la crisis energética y la inflación. Se necesitan políticas de mercado laboral adaptadas a los grupos más vulnerables del mercado laboral europeo. Se necesitan servicios públicos de empleo (SPE) bien equipados para aplicar las políticas activas del mercado laboral y llevar a cabo las estrategias de divulgación señaladas en la Recomendación EASE (apoyo para el empleo activo y eficaz, por sus siglas en inglés). Los SPE desempeñan un papel fundamental en la integración de los grupos más vulnerables de la sociedad en el mercado laboral, (entre otros) los refugiados, las mujeres, los trabajadores migrantes y estacionales, los trabajadores discapacitados y los ninis. La CES ha presentado una propuesta para la refinanciación del instrumento SURE, utilizando los recursos disponibles a través del fondo Next Generation EU (NGEU), como el excedente generado por la activación de los recursos del MRR no necesitados para los préstamos. También recomienda ampliar el alcance del SURE a medidas que protejan el empleo, apoyen a los trabajadores en las transiciones y protejan contra la pobreza energética. Los Planes Nacionales de Clima y Energía ya identifican los riesgos y desafíos de la pobreza energética y tienen que ser utilizados para señalar las medidas más urgentes y efectivas para prevenir la pobreza energética en los hogares.

El Semestre debería implicar a los interlocutores sociales a la hora de supervisar y evaluar la aplicación del MRR, particularmente cuando se responda a una emergencia económica con programas como REPowerEU, el Marco Temporal de Crisis o el Paquete de Preparación para el Invierno. Su participación garantizaría que los esfuerzos fiscales desplegados, para propiciar inversiones y proporcionar subsidios a las empresas, se evalúen en función de objetivos sociales claros. Dichos objetivos sociales son:

- Los objetivos principales de Oporto en materia de empleo, educación/formación y lucha contra la pobreza, con objetivos nacionales específicos y respuesta política identificados en los informes por país, y eventualmente reforzados por Recomendaciones Específicas por País (REP). Estos objetivos incluyen una participación más estructurada de los interlocutores sociales en la definición de los objetivos nacionales como resultado de los marcos políticos y las reformas que se acuerdan con los interlocutores sociales (una primera serie de aportaciones sindicales está disponible [aquí](#)).
- La identificación y eliminación de las brechas y desequilibrios sociales identificados en los cuadros de indicadores sociales y en el análisis cualitativo/cuantitativo por países, mediante una cooperación más estrecha con los interlocutores sociales. Creación de una práctica que propicie un procedimiento de desequilibrios sociales.
- Un plan de acción para la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales y, en particular, recomendaciones e instrumentos que proporcionan un marco más preciso a las políticas coordinadas de la UE, como EASE, el acceso a la protección social y la transición justa hacia la neutralidad climática y el Pacto de Capacidades.

- La consolidación de un enfoque del desarrollo centrado en el ODS8 con el objetivo de maximizar el impacto en el empleo de las políticas impulsadas por la UE y promover el trabajo decente, al tiempo que se preserva el medio ambiente, se adapta al cambio climático, se promueve el Estado de Derecho y se lucha contra las desigualdades.

Este enfoque debería conducir a una mayor sostenibilidad social de los Estados miembros y de la UE en su conjunto. El proceso del Semestre debería supervisar el bienestar general de los europeos, garantizando una distribución más justa de la renta y la riqueza, y midiendo el acceso a los servicios de interés general, así como su calidad. En particular, es necesario un análisis más exhaustivo de la situación del empleo a nivel sectorial y regional, con el fin de identificar y abordar mejor los riesgos sociales. Este análisis también debería ayudar a identificar y abordar los riesgos específicos entre los trabajadores jóvenes y los mayores de 55 años.

Aunque la brecha de género en el empleo sigue reduciéndose (pero a un ritmo lento), sigue siendo amplia (11% en la UE en 2021), o demasiado amplia en algunos países (más del 15%). Una estrategia de integración de la perspectiva de género también debería ayudar a identificar medidas específicas para promover el empleo de las mujeres, acompañadas de servicios de atención. En muchos países, el objetivo principal en materia de empleo sólo se alcanzará con medidas eficaces que aumenten y estabilicen la posición de las mujeres en el mercado laboral. La aplicación de la Directiva sobre la conciliación de la vida laboral y familiar también debería contribuir a una participación mayor y no discriminatoria de todas las mujeres en el mercado laboral y en la progresión de la carrera profesional. Los Estados miembros deben comprometerse a hacer cumplir la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo, para estar a la altura de la ambición del Marco Estratégico de la UE para la Seguridad y la Salud en el Trabajo de lograr cero muertes en el trabajo. La participación de los interlocutores sociales, y más concretamente de los representantes de salud y seguridad, será clave para garantizar el cumplimiento del principio de prevención de riesgos en todos los centros de trabajo de la UE.

Por último, pero no por ello menos importante, el Semestre Europeo tiene que garantizar que cada Estado miembro establezca y adapte acciones para eliminar las vulnerabilidades de los trabajadores y evitar que las personas caigan en la pobreza o la exclusión social. Según Eurostat, en 2021, 73,7 millones de personas en la UE estaban en riesgo de pobreza y 29,3 millones vivían en un hogar con baja intensidad de trabajo; los más vulnerables y con más probabilidades de estar en riesgo de pobreza o exclusión social son las mujeres, los adultos jóvenes, las personas mayores, las personas con bajo nivel educativo y los desempleados, pero también los ninis, los migrantes y las personas pertenecientes a minorías étnicas, los hogares unipersonales y los hogares con hijos dependientes. Se necesitan urgentemente políticas para reducir estas cifras ya en el próximo ciclo. Debe prestarse especial atención a las carencias materiales y sociales graves, que afectan a 27 millones de personas, identificando los grupos más vulnerables y abordando sus causas. Mientras que los sistemas basados en los seguros deben reformarse para garantizar una protección social adecuada tanto a los trabajadores estándar como a los no estándar (en concreto, a los autónomos dependientes), las redes de seguridad basadas en la asistencia y la solidaridad, como los regímenes de renta mínima, deben garantizar a todas las personas necesitadas de cualquier edad un apoyo a los ingresos adecuado y efectivo, así como satisfacer las necesidades de atención y otras necesidades esenciales. La pobreza laboral debe abordarse mediante mejores políticas de empleo y remuneración. Deben establecerse medidas específicas de apoyo a los ingresos para evitar que los hogares con bajos ingresos y baja intensidad de trabajo caigan en la pobreza, y los interlocutores sociales deben por su parte contribuir al desarrollo de vías para garantizar que el trabajo asegure condiciones de vida decentes y una movilidad social adecuada. La pobreza energética representa una preocupación creciente debido a los precios de la energía, que debe

abordarse mediante un seguimiento específico y medidas estructurales. Entre ellas se encuentra la búsqueda de una vivienda digna para todos, como motor fundamental para luchar contra la pobreza en toda la UE, tanto en las zonas rurales como en las urbanas; las condiciones de la vivienda deben ser cuidadosamente supervisadas en cada Estado miembro y abordadas con medidas ajustadas financiadas por la UE.

El Semestre debería abordar mejor las disparidades territoriales. Las zonas de la UE en desarrollo deben estar mejor equipadas con infraestructuras materiales e inmateriales eficientes, así como con servicios públicos de alta calidad, y en particular con sanidad, asistencia y suministro de energía. Hay que eliminar la brecha urbano-rural proporcionando acceso a una educación de alta calidad y a otros servicios esenciales, como los transportes, que potencien un desarrollo con orientación de género y una mayor rentabilidad social. Hay que perseguir la eficiencia energética en las regiones en desarrollo, también para garantizar unas condiciones de vivienda dignas. Además, hay que establecer medidas específicas para evitar que la brecha se agrave por el aumento de los precios (por ejemplo, del combustible, de los transportes públicos), con efectos negativos sobre la movilidad y, eventualmente, sobre las condiciones de vida, con referencia específica a la energía necesaria para la calefacción de los hogares. Los PNRR y las políticas públicas deben ser examinados para evaluar su capacidad de dar una respuesta real a esta cuestión.

El Semestre Europeo 2022 debe arrojar luz sobre el daño que la corrupción y el incumplimiento del Estado de derecho causan a la economía en general y a la calidad del trabajo en particular. El proceso del Semestre debe promover un esfuerzo común para luchar contra la economía no declarada, el tráfico y la explotación del trabajo y la corrupción. Asimismo, el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada son un cáncer para la sociedad y la economía, lo que se traduce en: destrucción de puestos de trabajo, accidentes y bajas laborales, y debilitamiento de las redes de protección social. Además, deben reforzarse los esfuerzos en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, junto con la aplicación de un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades. La Estrategia anual para un crecimiento sostenible (EACS) debe identificar los retos transfronterizos, que se traducen en impulsos políticos país por país, incluyendo la cooperación transfronteriza para luchar contra la criminalidad, y crear puestos de trabajo seguros y lugares de trabajo saludables, con el objetivo de una distribución más justa de la renta y la riqueza

El informe de la CES sobre el estado de aplicación de los PNRR muestra que existe un desajuste entre las medidas adoptadas en los planes nacionales y las expectativas sindicales. Este desajuste se debe sobre todo a las dificultades generalizadas para identificar las prioridades sociales y los hitos en los PNRR. Esto es consecuencia de la falta de implicación, o de una implicación inadecuada, de los interlocutores sociales en la aplicación del MRR. El Semestre 2023 debería identificar los motores de la igualdad, empezando por el empoderamiento de los sindicatos y el refuerzo de la negociación colectiva. La adaptación de los PNRR a un contexto económico que cambia rápidamente, y a los nuevos programas de la UE, es una oportunidad para cambiar e identificar mejor los objetivos y criterios sociales en los PNRR.

Hay que garantizar la eficacia de la implicación de los interlocutores sociales. Puede elaborarse un marco común de la UE para la implicación de los interlocutores sociales. No es necesario armonizar los procesos. Sin embargo, las prácticas nacionales respetan los criterios de calidad en cuanto a la involucración, de modo que la implicación de los interlocutores sociales sea oportuna, significativa y esté dirigida a los responsables de la toma de decisiones. Cuando los interlocutores sociales no son implicados, o cuando la implicación no cumple los criterios de calidad europeos de adecuación, significación y oportunidad - los planes (PNRR o PNR) deben permanecer congelados. Los interlocutores sociales deben estar dotados de las capacidades adecuadas.

EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD

Las respuestas políticas a corto plazo tienen que encajar en los marcos políticos previstos que conducen a la UE hacia un futuro sostenible. En respuesta a las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania, se gastan varios miles de millones de euros en apoyo a las empresas dentro del Marco Temporal de Crisis, y el Paquete de Preparación para el Invierno, mientras que los Estados miembros están adaptando sus PNRR al programa REPowerE, sin que haya garantía de su sostenibilidad.

Se trata de recursos procedentes de diferentes capítulos del presupuesto de la UE y de los presupuestos nacionales que deberían formularse mejor en un único marco de desarrollo estratégico en el que se tengan en cuenta todas las dimensiones de la sostenibilidad. Adoptar un enfoque centrado en el Objetivo 8 implica que el Semestre Europeo tiene que coordinar dichas medidas y enmarcarlas en un modelo de desarrollo estratégico más amplio de la UE, que incluya:

- a. Sostenibilidad, justicia fiscal y social, con el Pacto Verde en el centro;
- b. Economías y sociedades resilientes, con la agenda de salud y cuidado de la UE en su centro;
- c. La Agenda Social, con el Plan de Acción que implementa el PEDS a la cabeza;
- d. Una autonomía estratégica abierta que impulsará la agenda digital y la política industrial, lo que dará un nuevo impulso al proceso de integración de la UE.

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) siguen siendo una brújula adecuada para filtrar las decisiones que no cumplen con todos los requisitos de sostenibilidad, y descargará las opciones políticas que causan daño a algunos aspectos de la agenda de sostenibilidad, incluidos los sociales. Sin embargo, se requiere un mayor esfuerzo de coordinación y un diálogo más estrecho con los interlocutores sociales.

En un momento en el que la UE se está moviendo por fin para hacer que su modelo productivo y económico sea más resiliente, más verde y propicio al nuevo concepto de autonomía estratégica abierta, las políticas industriales y de empleo deberían estar profundamente integradas. Las medidas específicas adoptadas hasta ahora, capaces de movilizar varios miles de millones de euros en favor de las empresas -como la flexibilización del marco de las ayudas estatales o la simplificación del proceso de concesión de permisos para acelerar las inversiones- no están probadas en términos de sostenibilidad. El Semestre Europeo debería dar pruebas del impacto de tales medidas en el empleo, el trabajo decente, las desigualdades, las discriminaciones de género y el acceso al mercado laboral de los trabajadores y trabajadoras jóvenes.